



DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR. SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL
MAGISTRADA PONENTE: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
***"Al servicio de la justicia
y de la paz social"***

AI - 106

Procedimiento: Impedimento

Demandante: Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS Universitaria

Demandado: Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S

Radicado Único Nacional: 05001 31 22 000 2021 00496 00

Asunto: Resuelve impedimento

Medellín, veintiuno (21) de octubre del dos mil veintiuno (2021)

A través de apoderado judicial, IPS Universitaria formuló demanda ejecutiva en contra de Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S, pretendiendo que *"se libere mandamiento de pago (...) por la suma de siete (\$7.625.505.413), contenida en la factura Nro. 1754055, más los intereses moratorios desde el momento en que se hicieron exigibles las facturas"*.

El conocimiento de la acción correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín que, mediante auto del 9 de agosto de 2021, declaró la configuración de una causal de impedimento para conocer, a saber, la consagrada en el numeral 7 de artículo 141 del C.G.P pues, según afirmó, el representante legal de la IPS demandante presentó denuncia penal en su contra, señalando que en el proceso ejecutivo 2017 – 00653 que se adelantó contra dicha institución en ese mismo despacho judicial, se decretaron unas

medidas cautelares que no eran procedentes, incurriendo así en la presunta comisión del tipo penal prevaricato por omisión.

Argumentó que a la fecha desconocía el avance de la investigación puesto que no se había notificado ninguna actuación en el asunto, pero que tuvo conocimiento de la misma en virtud de la inspección judicial al expediente el día 12 de julio de 2018 por los investigadores judiciales encargados. En consecuencia, ordenó el envío del expediente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.

A través de auto 14 de septiembre de 2021, el referido Despacho manifestó que la causal alegada por la funcionaria judicial que remitió el proceso, se debía estructurar sobre unos condicionamientos y que uno de ellos, es la vinculación a la investigación penal.

Concluyó, que según el artículo 126 de la Ley 906 de 2004 una persona se entiende vinculada a un proceso penal desde la formulación de la imputación o desde la captura y que, al no haberse presentado ninguna de tales situaciones, no es posible predicar la configuración de la causal aducida, toda vez que la titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín aún no se encuentra vinculada al proceso penal.

CONSIDERACIONES

En primer lugar, es pertinente resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Código General del Proceso, la suscrita Magistrada es competente para decidir el presente asunto, por ser superior funcional de la juez que manifestó su impedimento.

En el caso concreto se observa que la causal aducida por la funcionaria que se declaró impedida es la consagrada en el numeral 7 del artículo 141 del C.G.P, a cuyo tenor: *"Son causales de recusación las siguientes: 7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, **denuncia penal** o disciplinaria **contra el juez**, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes den iniciarse el*

*proceso o después, **siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación***”.

De la lectura de la norma se colige con claridad que, para que se estructure la causal aludida es necesario que exista: (i) denuncia formulada en contra del juez o sus relativos en los grados descritos, (ii) que la denuncia se refiera a hechos ajenos al caso *sub examine* y que (iii) el denunciado se halle vinculado a la investigación; requisitos todos ellos cuya concurrencia deviene imprescindible y, por tanto, la ausencia de cualquier de ellos da al traste con la eventual configuración de la referida causal.

Ahora bien, sobre la vinculación de una persona al proceso penal establece artículo 126 de la Ley 906 de 2004 que ***"El carácter de parte como imputado se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación o desde la captura, si esta ocurriere primero. A partir de la presentación de la acusación adquirirá la condición de acusado"*** (Negritas fuera del texto original). En tales términos, es claro que mientras no se haya presentado uno de tales supuestos en el marco del proceso penal, esto es, captura o imputación, el indagado no se entiende vinculado al mismo y, por ende, siendo funcionario judicial, no se puede considerar impedido para conocer un determinado asunto que se encuentra a su cargo.

Resáltese que, como lo manifestara la misma funcionaria que adujo el impedimento, no se le ha notificado actuación alguna en el trámite punitivo y, el conocimiento que tiene del mismo, se limita a las pesquisas adelantadas por los funcionarios correspondientes en etapa de indagación. Sobre el particular, vale la pena traer a colación lo expuesto por el Consejo de Estado en proveído del 7 de mayo de 2015:

Ahora, lo cierto es que la situación alegada por el demandado tampoco encuadra en la segunda de las hipótesis previstas por el numeral 7º del artículo 150 del C.P.C., por cuanto si bien es claro que el objeto de la denuncia

penal y disciplinaria es ajeno al debate que se surtirá en el proceso de nulidad electoral, en el que se decidirá sobre la materialización o no de la supuesta inhabilidad de ejercicio de autoridad en que puede verse afectado el señor Nicolás Daniel Guerrero Montaña, quien resultó elegido como Representante a la Cámara por el departamento de Sucre, para el periodo 2014 - 2018, no es menos cierto que la Dra. Buitrago no se encuentra debidamente vinculada a la investigación penal que en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones se sigue en su contra. Se dice lo anterior, de un lado, porque tal y como se desprende de la certificación expedida por el Secretario de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, si bien mediante oficio de 12 de febrero de 2015 se informó a la Dra. Buitrago Valencia de la existencia de la investigación aludida, aquel fue respondido por ella el 18 de febrero de 2015, manifestando que “no me es posible jurídicamente darme por notificada del auto al que alude y que no se anexa. Porque desconozco su contenido y su sentido”, sin que a la fecha se le hiciera llegar dicho documento. Además, de otro lado, no escapa a la Sala el hecho de que el proceso penal en contra de la Magistrada recusada “se encuentra actualmente en investigación previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 424 de la Ley 600 de 2000”, lo que quiere decir que en él no se ha dado inicio a la investigación formal, que es a la que se refiere la causal de recusación objeto de análisis cuando establece: “Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal contra el juez, su cónyuge, o pariente en primer grado de consanguinidad, antes de iniciarse el proceso, o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal”. En efecto, tal ha sido la interpretación de esta Corporación sobre dicho requisito de materialización de la causal de impedimento y recusación.¹

Así las cosas, por considerarse infundado el impedimento formulado, se ordenará la devolución del asunto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín. En mérito de lo expuesto, la Suscrita Magistrada

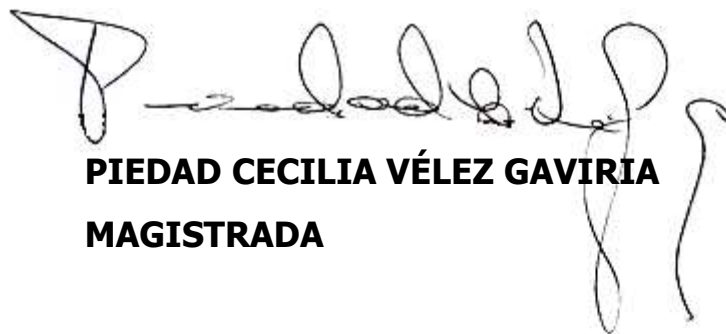
RESUELVE

¹ C.P. Alberto Yepes Barreiro (E). Radicado 11001-03-28-000-2014-00042-00.

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el impedimento formulado por la funcionaria que regenta el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. ORDENAR la devolución del expediente a tal Despacho para que continúe conociendo del asunto, en atención a las razones aquí expuestas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
MAGISTRADA

Firmado Por:

Piedad Cecilia Velez Gaviria

Magistrada

Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

19b740ef6e0332b9f0b5548358b452e656235fd8d80547a421e5a690c9ea8371

Documento generado en 21/10/2021 04:55:42 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>